Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

LA CONSTITUCIÓN DE 1901: INICIO DE LA REPÚBLICA NEOCOLONIAL HISTORIA DEL ESTADO Y EL DERECHO*

ACOSTA ALDAYA, ARIEL D.¹

UNIVERSIDAD DE LA HABANA

1. Antecedentes

El primer proyecto de Constitución separatista de Cuba se produjo tempranamente, antes de la Constitución de Cádiz. Fue el bayamés Joaquín Infante, cuyo texto no se descubrió hasta 1928, y se publicó por la Academia de la Historia de Cuba en 1930. El **proyecto de Infante**, según afirma Vega Vega “(...) *se basa en la clásica tripartición de poderes de Montesquieu, pero a los tres que originalmente habían sido propuestos (legislativo, judicial y ejecutivo), añadió un cuarto poder: el militar (...)*” (Vega

* Recepción: 9/8/2024; evaluación: 20/10/2024; aceptación: 25/11/2024

¹ Licenciado en Derecho, Universidad de la Habana, Cuba. Maestrando en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana.

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

Vega, 1988:20). Infante explicó este aporte afirmando que, en las condiciones de Cuba, una isla que podía ser invadida por muchos puntos, no era apropiado hacer depender la fuerza armada del poder ejecutivo, ya que resultaba necesario extremar la preocupación por la defensa exterior.

El poder legislativo se ejercería por solo seis diputados que integrarían un Consejo; el poder ejecutivo sería colegiado y se integraría por tres ministros: Guerra y Marina, Rentas e Interior. El poder judicial quedaría constituido por seis jueces y otros de menor categoría para las cuestiones civiles y penales; además habría jueces de policía y de paz. El poder militar tendría la responsabilidad primordial de la defensa exterior del territorio y la conservación del orden en el interior. Su líder sería el ministro de Guerra y Marina, que integraría el consejo ejecutivo. Los integrantes del poder legislativo serían electos, pero para ser elector era condición sine qua non tener la condición de propietario.

Se ha afirmado por diversos autores, entre ellos Infiesta (1942) y Hernández Corujo (1960), que la Constitución elaborada por Infante carece de técnica jurídica. En efecto, en ella figuran regulaciones que técnicamente deberían corresponder a otro nivel normativo, pero estas deficiencias técnicas no disminuyen su importancia como primera manifestación constitucionalista de los criterios independentistas que comenzaban a surgir en el seno de la nación cubana en formación, y como primer texto revolucionario en nuestro país.

La **Constitución de Cádiz** tuvo un efímero período de vigencia, de 1812 a 1814, pero fue restaurada en 1820 y estuvo vigente hasta 1823, con sus consecuentes libertad de imprenta, de debate político en la Isla y de elección de los diputados cubanos. La Constitución de Cádiz fue el resultado de un compromiso entre liberales y absolutistas. Los liberales lograron limitar seriamente el poder del

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

monarca y fijar algunos derechos y garantías fundamentales. Con estas restricciones daba paso al nacimiento de la monarquía constitucional. Los poderes del monarca se derivaban de la propia constitución y se ejercían conforme a sus postulados. Los absolutistas, por su parte, obtuvieron la conservación del carácter sagrado e inviolable del monarca, así como sus atribuciones, prerrogativas y la dirección del gobierno y la administración.

El monarca no podía impedir ni obstruir la celebración de las Cortes, suspenderlas o disolverlas, ni ausentarse del reino o abdicar o contraer matrimonio sin el consentimiento de las Cortes, entre otras prohibiciones. Las Cortes, para frenar sus poderes, creaban el Consejo de Estado como órgano consultivo único del Rey, “que oirá su dictamen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra y hacer los tratados”².

Por demás, los poderes del Estado fueron separados de manera estricta, con amplias facultades para los Cortes, que de este modo lograran superar siglos de preterición y decadencia. Las Cortes estaban investidas de la facultad de proponer, decretar, interpretar o derogar las leyes; establecer contribuciones e impuestos; fijar a propuesta del Rey, las fuerzas militares, en tiempo de paz o de guerra; adoptar medidas de promoción y fomento de la industria; establecer el plan general de enseñanza pública; y proteger las libertades constitucionales, entre otras.

El otro poder del Estado fue el judicial, con la cabeza del Tribunal Supremo. A los tribunales se les confió la administración de justicia, prohibiendo la intervención del Rey o de las Cortes y decretando la inamovilidad de los jueces, que solo podían ser depuestos a través de un procedimiento judicial.

² Artículo 236 de la Constitución de Cádiz

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

La Constitución fijó un marco general de protección de los derechos fundamentales de los españoles, pero no incorporó un cuerpo declarativo de los derechos fundamentales de las personas. En realidad, fue construido un exiguo catálogo de derechos y garantías fundamentales, caracterizado por su limitación y dispersión en el texto. Entre los derechos fueron reconocidos la libertad civil, la propiedad, el sufragio, la igualdad jurídica, la seguridad jurídica, la inviolabilidad del domicilio, la educación elemental y libertad de imprenta para libros no religiosos.

El texto constitucional produjo un cambio profundo en la administración municipal y provincial. Fue determinado el carácter enteramente electivo de los funcionarios (alcaldes, regidores y procuradores) de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Entre sus consecuencias, muy cara a la vida local cubana, desaparecerían los regidores perpetuos.

El 18 de enero de 1821 se inauguró una cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de la Habana, a cargo del presbítero Félix Varela y Morales, donde se hizo llegar a la juventud cubana los principios liberales de Cádiz. Esta difusión de ideas permitió sin duda alguna a la formación de una conciencia cubana constitucionalista. El maestro Hernández Corujo afirma que: *“El sentido de lo constitucional se fue formando en esta etapa ya que desde 1820 hasta 1823 se fortaleció este criterio de la rebelión y de las nuevas ideas políticas”* (Hernández Corujo, 1960:14).

Varela, diputado a las Cortes en 1822, presentó en 1823 su proyecto autonomista, conocido con el nombre de Proyecto de instrucción para el gobierno económico político de las provincias de Ultramar, constituido por un preámbulo y 189 artículos en tres títulos.

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

Cuando las Cortes españolas declararon que Cuba debía regirse por leyes especiales, es decir, que Cuba realmente no era una provincia, sino una colonia de España, y se revocó el derecho de los diputados cubanos a representar a la Isla, se vio de forma clara que existía más camino que el de la independencia, que cualquier solución reformista o autonomista estaba vedada, que aún cuando alguna de estas soluciones habían cristalizado en proyectos, el único realmente viable era el de la independencia.

El 10 de abril de 1834 se promulga en Aranjuez, el Estatuto Real, al decir de Torres Cuevas y Suárez Suárez, “(...) *que restableció las Cortes, pero sin traslado de poderes, solo con funciones consultivas. Estructurado en cinco títulos y cincuenta artículos, estableció unas Cortes estamentales, con dos cámaras: la de Próceres y la de Procuradores (...)*” (Torres Cuevas y Suárez Suárez, 2018:8). El Estamento de Próceres estaba formado por los representantes de la nobleza y el clero y otros individuos designados por el Rey en virtud de sus posesiones o méritos. El Estamento de Procuradores era integrado por individuos con determinadas rentas que resultaren elegido.

El Estatuto Real es un documento de dudosa naturaleza constitucional, por no distinguir poderes ni proclamar un cuerpo de derechos individuales, consecuencia de un proceso constituyente, resultó una carta otorgada, equivalente a las que tradicionalmente otorgaban los reyes como concesión a los pueblos españoles. Este documento no tuvo ningún efecto modificador en Cuba, salvo crear mayor agitación e inquietud.

1.1 Constitución de la Monarquía Española (1876)

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

El 9 de enero de 1875, llegaba a Barcelona el nuevo monarca. Confió a Cánovas no solo el gobierno sino algo más importante, la creación de un nuevo sistema político y la promulgación de una nueva Constitución. La idea era buscar un equilibrio político a través de un sistema bipartidista.

La nueva Constitución fue promulgada el 30 de junio de 1876. El concepto histórico de soberanía nacional se vio limitado por la teoría de la constitución interna. Se aducía la preeminencia soberana de la monarquía sobre la Constitución. El Rey mantuvo la iniciativa legislativa y la potestad de sancionar y promulgar las leyes, e incorporó el veto suspensivo sobre las Cortes. Por otra parte, el Soberano mantuvo el control del poder ejecutivo. Las Cortes siguieron siendo bicamerales, Congreso de Diputados y Senado. Este último dejó de ser electivo. Los senadores eran de tres tipos: nombrados por el Rey, por derecho propio y electos por las corporaciones del Estado y los mayores contribuyentes.

Los derechos fundamentales fueron seriamente restringidos. Se suprimió el voto universal y las garantías legales. La libertad de cultos fue reducida significativamente. En cuanto a los territorios de Ultramar, se regresó a la concepción de Leyes Especiales. Esta vez se introdujeron dos variables de beneficio: la autorización del gobierno para extender a Ultramar las leyes españolas, con las modificaciones convenientes; y la concesión del derecho de representación a las Cortes.

En otro sentido, se restableció el sufragio censatario. De él quedaron excluidos el voto de los trabajadores, campesinos, analfabetos, de la mujer y de amplios sectores medios. Solo tenía derecho al voto el 2.1 % de la población española. La Constitución de 1876 será la última que regirá en el siglo XIX español, y su vigencia se extenderá hasta abril de 1931.

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

Consecuente con el estado de excepción dictado por estar la Isla en guerra, cuando se elaboró la Constitución de 1876, esta no tuvo vigencia en Cuba.

1.2 Constitución Autonómica de la Isla de Cuba (1897)

Como consecuencia del Pacto del Zanjón, y entre otras leyes y reformas introducidas por la Corona española, se autorizó la creación de partidos políticos en Cuba. En cierta medida se reprodujo en la Isla el modelo bipartidista del sistema creado en la Península y sobre el cual se sostenía la Constitución de 1876. Surgieron dos partidos que acapararon la esencia del sistema político de la Isla: el Partido Liberal y el Partido Unión Constitucional, este último de carácter conservador.

Desde el principio, las autoridades españolas vieron en el Partido Liberal la fuerza política que podía enfrentarse al movimiento independentista. El primero de agosto de 1878, los liberales promulgaron su programa. En este documento se podía observar la existencia de una importante tendencia dentro de ese partido que concebía las reformas, con una abierta intención de lograr un gobierno autonómico para Cuba. Poco tiempo después hicieron pública su intención al cambiar su nombre por Partido Liberal Autonomista. Durante diez años (1879-1889) los autonomistas fueron delineando su programa y su visión de cómo iba a ser el gobierno autonómico de la Isla. La esencia de toda la proyección de los autonomistas era lograr un proyecto descentralizador que permitiera las mayores libertades a los sectores dominantes en la Isla y, a la vez, que fuera una expresión de la cultura de la Isla.

Para el gobierno y las autoridades españolas el elemento central para la existencia de un partido autonomista era que, por su composición, intereses y objetivos, este sería la contraparte del movimiento independentista. Los más

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

destacados miembros de la línea autonomista fueron radicalmente antindependentistas. Martí le llamó a esta institución política “el partido de la equivocación permanente”.

La mayor contribución del autonomismo a la independencia cubana reside en su descalabro político. Este no se debió a la inviabilidad de sus propuestas, a que no estuvieran sólidamente argumentadas. El problema fue que sus propuestas chocaron con la incapacidad de las autoridades coloniales para tolerar cambios que, desde su punto de vista, pudieran dañar el control absoluto de la Isla.

El 25 de noviembre de 1897, a través de tres Reales Decretos, se produjo la implementación del régimen autonómico. El primero de ellos establecía la primera y única Constitución Autonómica que rigió en Cuba.

La Constitución Autonómica, de 70 artículos, cuatro artículos adicionales y dos transitorios, en condiciones normales, y en tiempos ya pasados, pudo haber significado un importante paso de avance en las aspiraciones cubanas pero en las condiciones en que se dicta, de hecho con un movimiento independentista consolidado, con un ejército español en pésimas condiciones y con una amenaza externa nociva tanto para Cuba como para España, apenas podía tener un peso determinante en la situación y en el destino de la Isla.

Sin embargo, la Constitución Autonómica no constituyó el centro de poder de la Cuba colonial. El poder real³ siguió estando en manos de las autoridades metropolitanas, directamente o a través del Gobernador Superior Político, quien a su vez era el Capitán General de la Isla. Este último tenía la dualidad de, por una parte, ejercer el Gobierno supremo de la colonia y, por otra, actuar como representante de la monarquía española. A él se le subordinaban todas las

³ Comparado con lo precedente, sus poderes fueron disminuidos, especialmente porque en muchos aspectos sus decisiones necesitaban del refrendo ministerial.

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

autoridades de la colonia, pudiendo nombrar y separar libremente a los secretarios de Despacho; tenía el mando de los distintos cuerpos armados radicados en Cuba, era Vicerreal Patrono de la Iglesia y Delegado de los ministros de Estado, Guerra, Marina y Ultramar. Estaba investido de iniciativa legislativa –más que el propio Rey tenía ante las Cortes españolas- y de las tradicionales facultades de sancionar, ejecutar o suspender los acuerdos del parlamento colonial, y aún de convocar, suspender y disolver por separado o conjuntamente el Consejo de Administración y a la Cámara de Representantes. Podía suspender el sistema de garantías constitucionales y adoptar medidas excepcionales para la conservación de la paz interior y la seguridad exterior.

El fracaso del régimen autonómico se dio desde sus inicios. El movimiento independentista lo rechazó y lo interpretó como los primeros signos del descalabro español. El presidente de la República en Armas, Bartolomé Masó; el secretario de guerra, brigadier José Braulio Alemán; el jefe del Ejército Libertador, general Máximo Gómez; el jefe del Departamento Oriental, general Calixto García, y otros altos funcionarios y oficiales mambises, rechazaron enérgicamente la implantación de la autonomía en la Isla y se negaron a negociar el fin de la guerra con las autoridades del régimen autonómico.

El 31 de diciembre de 1897 quedó integrado el Gabinete de Gobierno. Lo presidía el líder del Partido Autonomista, José María Gálvez y estaba formado por tres autonomistas: Antonio Govín Torres, en Gobernación y Justicia; Rafael Montoro y Valdés, Hacienda; Francisco Zayas, Instrucción Pública. La cartera de Obras Públicas y Comunicaciones fue ocupada por Eduardo Dolz y Arango y la de Agricultura, Industria y Comercio, por Laureano Rodríguez, ambos reformistas.

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

2. Constituciones mambisas

2.1 Constitución de Guáimaro (1869)

Las ideas independentistas, para los años sesenta del siglo XIX, ya tenían una larga data. El desarrollo del pensamiento social, político y jurídico durante las décadas de la primera mitad de la centuria, habían permitido fundamentar que no estaban tan claramente definidos en los inicios del constitucionalismo decimonónico. En particular, las revoluciones de 1848 habían ponderado la república frente a la monarquía, el Estado laico, la separación de los poderes del Estado, la superación de toda forma de esclavitud, la definición y fundamentación de los deberes y derechos del ciudadano, el debate sobre las características económicas de los Estados y las ideas socialistas.

El inicio de la Guerra de los Diez Años el 10 de octubre de 1868 no fue un acuerdo entre todos los grupos revolucionarios. Carlos Manuel de Céspedes organiza en Bayamo un gobierno, Junta Revolucionaria de la isla de Cuba, integrada por cinco miembros y presidida por un capitán General, cargo que él asumió. El 4 de noviembre del propio año en Las Clavellinas, Puerto Príncipe (Camagüey) se pronuncian los conspiradores de esta región.

No acatan el gobierno creado por Céspedes e instituyen otro, caracterizado porque su dirección es colegiada y que se dio el nombre de Comité Revolucionario del Camagüey⁴. El 26 de febrero de 1869 la Junta daba paso a la Asamblea de Representantes del Centro ahora formada por cinco miembros⁵.

⁴ Lo integraban Salvador Cisneros Betancourt, Ignacio y Eduardo Agramonte Piña.

⁵ Además de los tres integrantes del Comité Revolucionario entraron a formar parte de la

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

Días antes, el 6 de febrero de 1869, la Junta Revolucionaria de Las Villas, cuya dirección estaba compuesta por cinco ciudadanos, encargados de la dirección de los asuntos “provisionalmente”, conforma un tercer gobierno insurrecto.

Un grupo de los participantes en el Movimiento villareño, decidieron entrevistarse con los representantes de la Asamblea camagüeyana, hecho que tuvo lugar en el mes de marzo de 1869. Allí los villareños se sumaron a las posiciones de los camagüeyanos. De igual modo acordaron promover una reunión de los representantes de las distintas regiones en guerra para formular una Constitución de la República de Cuba. El 10 de abril de 1869 se aprobaba la Constitución redactada en Guáimaro, Camagüey. De esa forma surgía la primera Constitución cubana bajo el signo y las contradicciones de los revolucionarios cubanos.

La estructura de la Constitución de Guáimaro es sencilla. Está formada por solo 29 artículos. Por su contenido Cuba es una república dividida en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. La forman cuatro Estados, Oriente, Camagüey, Las Villas y Occidente. La Carta Magna tiene un carácter provisional hasta tanto dure la guerra y se constituya el Estado nación independiente. Lo más destacado de su articulado es, que, a pesar de la división de poderes, el legislativo se convierte en el poder supremo, la Cámara de Representantes, lo que constituye un antecedente de nuestra actual Asamblea Nacional del Poder Popular. Esa Cámara estaría integrada por representantes, en número igual de los cuatro estados en que se dispuso quedara dividido el territorio nacional. Se trataría de una representación, no sobre la base de la población, sino de los estados, en cada uno de los cuales habría un ejecutivo, es decir, un gobierno territorial. Para ser

Asamblea de Representantes Antonio Sambrana y Francisco Sánchez Betancourt.

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

representante se requería como únicos requisitos el de la ciudadanía cubana y la mayoría de edad de 20 años.

Por otra parte, el poder ejecutivo queda marcadamente limitado a simplemente proponer a la Cámara los secretarios de Despacho, dirigir las relaciones exteriores y sancionar los acuerdos de la Cámara. De esta forma, el ejecutivo quedaba supeditado y en manos de la Cámara. El encargado del poder ejecutivo sería el Presidente nombrado por la Cámara. Nada establece el texto constitucional lo referente al Poder Judicial. Solo prescribe que será objeto de una ley especial.

Uno de los aspectos más importantes de esta Constitución, que denota una superación de todas las discusiones anteriores, es la declaración de que: “todos los habitantes de la República son enteramente libres”. De igual forma resultaba de vital trascendencia el artículo 26 donde se declaraba que: “la República no reconoce dignidades, honores especiales, ni privilegio alguno”.

La Constitución de Guáimaro fue la única que rigió en Cuba entre abril de 1869 y febrero de 1878, si bien su vigencia se limitaba a los territorios liberados por los mambises. España, por su parte, siguió manteniendo y reforzando las Facultades Omnímodas de los capitanes generales. La República de Cuba nacía con un texto constitucional que, además, significaba la unidad nacional, representada por las fuerzas independentistas. Se convirtió en el precedente de una práctica inviolable, todo acto debía estar acorde con preceptos constitucionales.

La Cámara de Representantes se disolvió el 8 de febrero de 1878 y dos días después cesaban las hostilidades y se fue al Pacto del Zanjón y su contrapartida revolucionaria, la Protesta de Baraguá protagonizada por Antonio Maceo, el Titán de Bronce. De esta Protesta surgió la segunda Constitución revolucionaria de la lucha anticolonial que llevó su mismo nombre: Baraguá.

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

2.2 Constitución de Baraguá (1878)

El surgimiento de nuestra segunda Constitución de las guerras anticoloniales se produjo debido a que las negociaciones de paz que condujeron al Zanjón no fueron aceptadas por Antonio Maceo y sus soldados, quienes decidieron continuar la guerra con los objetivos de independencia y abolición de la esclavitud.

El texto constitucional de Baraguá fue redactado por una comisión formada por Félix y Fernando Figueredo, Pedro Martínez, Modesto Fonseca y Juan Ríos Rivera y aprobada, por aclamación, a las diez de la noche del 23 de marzo en el propio Baraguá. Consta de solo seis artículos, según Torres Cuevas y Loyola Vega: (“...”) que reflejaban la experiencia histórica del independentismo cubano (“...”) (2001:288). Carecía de parte dogmática y de cláusula de reforma.

Según el texto de la misma el gobierno estaría compuesto por cuatro individuos (un presidente, un secretario y dos vocales). Estos nombrarían un General en Jefe que sería el único responsable de las operaciones militares. Solo sobre la base de la independencia, con el consentimiento del pueblo, se podría hacer la paz. Se determinaba que el poder judicial era independiente del gobierno y sería ejercido por un Consejo de Guerra. Tres aspectos son notables en esta Carta Magna: desaparece la Cámara de Representantes; las facultades ejecutivas, concentradas en la guerra, quedaba en manos del General en Jefe; el gobierno queda concentrado en un Consejo con funciones prácticas.

2.3 Constitución de Jimaguayú (1895)

El 24 de febrero de 1895 se reanudan las luchas por la independencia nacional. Esta nueva contienda bélica parte de dos presupuestos fundamentales, la

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

experiencia de lo acaecido en la Guerra de los Diez Años y la maduración y enriquecimiento del pensamiento revolucionario cubano. Antonio Maceo y José Martí constituyen las expresiones líderes de los nuevos tiempos; Máximo Gómez, la garantía honesta y decidida, para la ejecución del proyecto independentista. Desde el inicio de la guerra y de acuerdo con la tradición de Guáimaro, existió el consenso de la necesidad de formular una nueva Constitución como norma suprema provisional que garantizara la unidad jurídica y política y así mismo facilitara el reconocimiento internacional de la República de Cuba. El 13 de septiembre de 1895, en Jimaguayú, Camagüey, se reunieron los 20 delegados que elaboraron y proclamaron la nueva Constitución. A diferencia de Guáimaro, los delegados no respondían a la división territorial del país sino que actuaban como representantes de los cuerpos de ejército existentes en ese momento. La Constitución dispuso de una organización sencilla y práctica y contuvo 24 artículos.

El artículo I de la Carta Magna disponía que el Gobierno Supremo de la República residiría en un Consejo de Gobierno, integrado por un Presidente, un Vicepresidente y cuatro Secretarios de Estado. En este Consejo radicaban las funciones legislativas y ejecutivas, o sea, se instituía un solo poder, el revolucionario, porque, aunque el artículo 23 disponía que el poder judicial procederá con entera independencia de todas las demás, esta declaración es formal pues inmediatamente dispone que su organización y reglamentación estarán a cargo del Consejo de Gobierno.

La Constitución carece de parte dogmática, lo que es atribuido por algunos a un olvido de los constituyentistas, mientras otros creen que fue una decisión deliberada. No consta de una definición de los derechos civiles y, las violaciones

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

que pudieran efectuar los ciudadanos, ya fuesen civiles o militares, serían juzgadas por Consejos de Guerra.

El mecanismo de reforma de la Constitución de Jimaguayú figura en su artículo 24, el cual, tras declarar que la Ley Fundamental solo regiría dos años a contar desde su promulgación, si antes no termina la guerra de independencia, dispone la convocatoria de la Asamblea de Representantes del pueblo en armas atribuye la facultad de elegir un nuevo Gobierno, o mejor, un nuevo Consejo de Gobierno, por lo que la mencionada Asamblea, además de ser constituyente, sería también un órgano gobernante o soberano.

2.5 Constitución de la Yaya (1897)

Cumpliendo el mandato de Jimaguayú el 19 de septiembre de 1897 se convocó a una nueva Asamblea Constituyente. Esta podía modificar el texto vigente, convocar a nuevas elecciones para conformar el Consejo de Gobierno y efectuar la censura de los miembros salientes. De los 24 delegados a la Constituyente, solo Salvador Cisneros Betancourt había participado en la Constitución de Jimaguayú. Esto demostraba una total renovación; los delegados de los distintos cuerpos de ejército eran profesionales, en su mayoría abogados y médicos.

Las primeras sesiones, se efectuaron en Aguará, Camagüey. A partir del 5 de octubre se sesionó en El Potrero de la La Yaya perteneciente a la misma provincia. El principal conflicto en el debate constitucionalista era en lo referente al Consejo de Gobierno y el General en Jefe. Si comparamos la Constitución de la Yaya con sus precedentes mambisas se puede destacar que la misma es más extensa y técnicamente correcta, está dotada de una parte dogmática y una parte orgánica. La conforman cinco títulos y 48 artículos. Fue aprobada y proclamada el 30 de octubre de 1897.

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

Este texto constitucional es el primero que estipula los derechos individuales y políticos. Estos son: la inviolabilidad del domicilio, la libertad postal, la libertad religiosa y de culto, la igualdad ante el impuesto, la libertad de enseñanza, el derecho de petición, el sufragio universal, la libertad de opinión, el derecho de reunión y el de asociación.

Se ratifica la estructura creada en Jimaguayú, el Consejo de Gobierno, pero se suprime en el texto la figura del General en Jefe. Por su artículo 31, las máximas responsabilidades militares recaen en el Secretario de la Guerra que será el Jefe Superior jerárquico del Ejército Libertador. Además, el Consejo de Gobierno asume el nombramiento de la oficialidad de coronel hacia abajo. Era evidente que esta Constitución pretendía limitar la autoridad del general Máximo Gómez, aunque se cuidaron de no hacer referencia a ninguna atribución de nombramiento o sustitución del imprescindible e insustituible General en Jefe.

La Constitución de la Yaya fue la última Constitución mambisa. Establece, como su antecesora que, si a los dos años no se había logrado la independencia, se reuniría una nueva Asamblea de Representantes con las facultades de hacer otra o modificarla.

Lo no previsto por los constitucionalistas sucedió: Estados Unidos le declaró la guerra a España el 18 de abril de 1898. Después de un breve período de combates, el gobierno de Madrid decidió firmar un tratado de paz con Estados Unidos. El 10 de diciembre de 1898 era firmado el Tratado de París, con el cual se transfería la soberanía de la Isla a la nación norteamericana. El 1 de enero de 1899 cesaba la soberanía española sobre la isla de Cuba y se iniciaba la norteamericana. El Consejo de Gobierno de la República en Armas fue totalmente desconocido por ambas partes. La situación creada no estaba prevista en el texto constitucional. Las autoridades norteamericanas prefirieron establecer

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

relaciones con distintos sectores del movimiento independentista, pero sin atribuirles un carácter legal ni oficial a las mismas.

Por su parte, los independentistas cubanos según lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Constitución de la Yaya acordaron efectuar elecciones entre los miembros del Ejército Libertador para una nueva Asamblea Constituyente. Fueron designados 44 representantes. Esta nueva Asamblea fue totalmente obviada por las autoridades norteamericanas, sin ningún reconocimiento y, por tanto, sin ningún resultado.

3.La República Neocolonial

3.1 La Enmienda Platt

La Enmienda Platt no fue una enmienda a la Constitución cubana de 1901, pero funcionó como tal. En realidad, fue una enmienda presentada en el senado de Estados Unidos por un senador llamado Orville Platt, el 25 de febrero de 1901, a un proyecto de ley que directamente no tenía nada que ver con Cuba ni con su soberanía, ya que era un proyecto de ley concediendo créditos para el Ejército norteamericano. Es decir, no era una verdadera enmienda, ni siquiera en cuanto a la legislación norteamericana; era lo que en lenguaje legislativo se conoce por una percha.

Los verdaderos autores intelectuales de la Enmienda Platt fueron los monopolios que tenían y tienen en sus manos la dirección política y económica de Estados Unidos y que no querían renunciar a la parte que Cuba representaba el botín de guerra al que se creían con derecho por su intervención en nuestra última guerra de independencia del siglo pasado. Sin embargo, se ha atribuido la paternidad intelectual de esta Enmienda al entonces secretario de Guerra de Estados Unidos,

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

Elihu Root, quien había hecho figurar su contenido esencial en una carta que envió al general Wood, gobernador militar de Estados Unidos en Cuba, con fecha 9 de febrero de 1901.

Enseguida se hizo evidente para los cubanos que los Estados Unidos pretendían con la Enmienda Platt vestir con un nuevo ropaje sus verdaderas intenciones de convertir a Cuba en una colonia suya, y que era impuesta a los cubanos bajo la amenaza de hacer interminable la ocupación militar norteamericana.

En su contenido se establecía que ningún gobierno cubano podría en el futuro concertar un acuerdo con una potencia extranjera que disminuyera o comprometiera la independencia del país o concediera derecho o privilegio sin el consentimiento de los Estados Unidos. A ellos se añadía que Cuba no podía asumir o contraer deuda pública que excediera la capacidad de pago del país. Sin embargo, otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervención para la preservación de la independencia, el mantenimiento de un gobierno estable y la protección de vidas, propiedades y libertades individuales. Por último, se le otorgaba a Estados Unidos el derecho a adquirir tierras para establecer bases navales. En esencia, implicaba la convalidación de todos los actos del gobierno interventor y la plataforma de su dominio sobre Cuba.

En febrero de 1901 el Senado de Estados Unidos aprobó por una holgada mayoría la enmienda que Orville H.Platt presentó a la Ley de Presupuestos del Ejército conteniendo la esencia de estas cinco exigencias y agregando tres más: la obligación del gobierno cubano de ejecutar y ampliar los planes sobre saneamiento de las poblaciones de la Isla; la omisión de Isla de Pinos de los límites establecidos por la Constitución, quedando su propiedad pendiente de un futuro arreglo bilateral; y la obligación de concertar un tratado permanente entre los dos gobiernos con asiento de todas las imposiciones anteriores.

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

3.2 La Constitución de 1901: inicio del republicanismo en Cuba

La Constitución de 1901 ha sido estigmatizada por viajar acompañada de un indeseable: la Enmienda Platt, que como apéndice se le incorporó utilizando la coacción política.

Tiene, además, otro lastre: nacer en la frontera de los siglos XIX y XX. Ella obedeció a la doctrina individualista y la técnica constitucional clásicas del siglo XIX y rigió cuando irrumpieron nuevos moldes constitucionales con contenidos sociales y económicos de vanguardia que la superaron.

La Constitución fue fruto de dos situaciones especiales que afectaron su proceso de elaboración: la cruenta guerra por la independencia nacional que le precedió impactó los contenidos; y la ansiedad y premura por superar el estado de ocupación militar extranjera en que se hallaba el país afectaron la intensidad y tiempo de los debates.

La Constitución de 1901 estaba dotada de 115 artículos divididos en 14 títulos, con disposiciones transitorias, fue firmada por los convencionales en la tarde del 21 de febrero de 1901. Nuestra primera Constitución neocolonial constaba de un preámbulo, una parte orgánica, una parte dogmática y una cláusula de reforma a más de unas disposiciones transitorias y el Apéndice que la desnaturalizaba totalmente.

El artículo 1 dispuso que: El pueblo de Cuba se constituye en Estado independiente y soberano, y adopta, como forma de gobierno la republicana. Con razón se preocupó José Clemente Vivanco de que se declarara esa independencia y soberanía popular ya que, por lo general, las constituciones no contienen ese tipo de declaración. Es evidente, sin embargo, que esa frase contenía una aspiración popular contradicha en la Constitución por la Enmienda Platt que

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

aparecía en ella como Apéndice. Otra observación de Clemente Vivanco resulta especialmente válida: (“...”) La República no es una forma de gobierno, sino un sistema de organización del Estado (“...”) (1902:4) y por ende la frase adopta como forma de gobierno la republicana, constituye un error técnico.

La singularidad se produjo en el reconocimiento de los cubanos por naturalización, puerta que fue abierta a todos los extranjeros que hubiesen pertenecido al Ejército Libertador, que no eran pocos, con la sola condición de solicitar la ciudadanía dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la Constitución.

Si se quiere apreciar la singularidad del momento, téngase en cuenta que, si bien para ser senador o magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se exigió ser cubano por nacimiento, no se estatuyó lo mismo para ser Presidente de la República.

La Constitución estableció el postulado de que todos los cubanos eran iguales ante la ley, con iguales derechos, y no se reconocieron fueros ni privilegios personales. Esto último, significaba que la igualdad se aplicaba con independencia del nacimiento, color de la piel o la riqueza acumulada.

De igual manera contempló una cantidad nada despreciable de garantías y derechos fundamentales: libertad de pensamiento, de imprenta, reunión, asociación, movimiento, petición, inviolabilidad del domicilio; no efecto retroactivo de las leyes excepto las penales cuando fueran favorables al procesado; prohibición de las detenciones al margen de los casos y formas prescritas por las leyes; obligación de liberar o presentar al detenido dentro de las 24 horas; y dentro de las 72 horas siguientes elevarla a prisión o dejarla sin efecto; prohibición de que alguien pudiera ser preso si no era en virtud de mandato judicial, o que algún reo pudiera ser procesado o sentenciado sino era

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

por juez o tribunal competente y por una ley previa al hecho delictivo y bajo las formas procesales prescritas⁶. Se establecía el derecho a no declarar contra sí mismo ni contra los parientes más cercanos; que nadie pudiera ser privado de su propiedad, salvo por autoridad competente y causa justificada de utilidad pública; que no pudiera imponerse la pena de confiscación de bienes; imposibilidad de que Estado pudiera anular o alterar las obligaciones civiles nacidas de los contratos o de otros actos u omisiones. Muchas de estas garantías forman parte de eso que conocemos actualmente como debido proceso, categoría que viene del sistema anglosajón y no es más que el conjunto de mecanismos y garantías procesales y jurisdiccionales que tiene el ciudadano de cara al justiciable en un proceso concreto.

Este sistema de derechos y garantías situó a la Constitución, cuando menos, en una equivalencia con los textos constitucionales de las más importantes naciones del área latinoamericana. La prohibición de la pena de muerte para los delitos de carácter político posibilitó que Cuba iniciara de manera parcial el camino abolicionista, como ya lo habían hecho las constituciones vigentes de Argentina (1853), México (1857) y Colombia (1886).

A pesar de esta enumeración ampliada de derechos no se refrenda nada de derechos sociales. Solo la enseñanza primaria de carácter obligatoria y gratuita, en lo cual el Estado tendría la responsabilidad de proveerla mientras los municipios y provincias no estuvieran en condiciones de sostenerlas.

Una de las mayores limitaciones del texto constitucional fue en materia de sufragio, cuya constitucionalización fue objeto de un amplio debate. Cuando se redactaron las bases, la mayoría consideró que el asunto debía consagrarse en una

⁶ En caso de violación de los términos y condiciones legales debía ser puesta en libertad sumariamente a petición propia o de cualquier ciudadano

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

ley especial ya que podría ser modificada la forma de ejercitarse y fue excluida toda referencia al asunto, a pesar de tratarse del derecho político de participación del ciudadano en un régimen democrático. Aceptada en plenario la incorporación del sufragio universal al texto constitucional fue proclamado con carácter restrictivo (varones mayores de 21 años de edad. Se destaca que no estableció limitaciones por motivos de raza o preparación cívica. De esta manera, los negros y los analfabetos fueron habilitados para votar.

Al discutirse la verdadera universalidad del sufragio, que supone otorgar ese derecho también a las mujeres, los asambleístas desaprovecharon la oportunidad histórica y la República fue formulada con la exclusión de la participación política de esa parte importante de la sociedad. El sufragio fue redactado de tal manera que si en el futuro el Congreso quisiera dar participación a las mujeres no pudiera hacerlo sin antes reformar la Constitución.

Otro aspecto medular significó que no hubiese sufragio directo para la elección del Presidente y de los miembros del Senado de la República. Fue una limitación significativa del texto constitucional.

La Constitución consagró la forma republicana de gobierno sobre la base de la soberanía popular. En varios aspectos, se imitó la Constitución de Estados Unidos. El poder público nacional fue dividido en los tres poderes clásicos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Legislativo se dividió en dos cámaras: la de Representantes y el Senado, llamadas en común Congreso, con atribución de formar los códigos y las leyes de carácter general, determinar el régimen electoral y la organización de la administración del país, incluyendo la provincial y municipal; discutir y aprobar los presupuestos; acordar empréstitos; acuñar moneda; regular diversos servicios generales; conceder amnistías; organizar las

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

fuerzas armadas; declarar la guerra y acordar la paz, entre otras⁷. Las leyes o resoluciones aprobadas por ambas cámaras se sometían a la aprobación presidencial para su sanción; de rechazarlas, una nueva votación de dos terceras partes sería suficiente para convertirlas en ley.

El Senado se consagró como símbolo de equilibrio y moderación políticas y representación de las provincias cubanas. Había cuatro senadores elegidos por ocho años por cada una de las seis provincias cubanas, pero a estos se les exigía mayor de edad que a los representantes y ser cubano por nacimiento. El Senado podía constituirse en tribunal para juzgar al presidente de la República, a los secretarios de Despacho y a los gobernadores de provincias.

La Cámara, por acuerdo de las dos terceras partes, podía acusar al presidente de la República y a sus secretarios de Despacho por actuar contra el libre funcionamiento de los poderes legislativos y judicial, violación de la Constitución u otros delitos de carácter político.

El Poder Judicial, de carácter independiente, quedó organizado con un Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales inferiores establecidos por ley, con prohibición de crear comisiones judiciales o tribunales extraordinarios y con la garantía de la inamovilidad de sus funcionarios.

El Poder Ejecutivo era ejercido por el Presidente de la República, elegido por cuatro años y con derecho a reelección. Jefe de Estado y de Gobierno tenía el encargo de sancionar y promulgar las leyes, ejecutarlas y hacerlas ejecutar, dictar reglamentos y órdenes ejecutivas en materia de gobierno y administración pública. Entre sus funciones estaba convocar sesiones extraordinarias del Congreso, al que recomendaría la adopción de leyes y resoluciones y presentaría el Proyecto de los Presupuestos anuales. A él correspondía nombrar y remover a

⁷ Artículo 50 de la Constitución de 1901

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

los secretarios de Despacho; nombrar, con aprobación senatorial, al presidente y los magistrados del Tribunal Supremo, así como a otros altos funcionarios y agentes gubernamentales.

La Reforma de la Constitución, parcial o total era potestad del Congreso de la República. Para ello era necesaria la votación favorable de las dos terceras partes de cada cuerpo colegislador.

4. Consideraciones finales

La Historia de Cuba está marcada por una tradición constitucionalista de antaño, el propio desarrollo del pensamiento jurídico va dando al traste con el propio tecnicismo y capacidad garantista de nuestros textos constitucionales a lo largo del periodo analizado en este modesto trabajo.

La Constitución de 1901 sentó las bases de lo que hoy conocemos como república, sin embargo, es dable argumentar que este texto no solo era una Ley Fundamental mediatizada por un poder extranjero sino también una constitución burguesa y por ello, al reconocer como uno de los derechos individuales el derecho a la propiedad, incluso sobre los medios de producción, garantizaba la continuidad de la explotación e impedía que los derechos humanos que consagraba pudieran ser realmente ejercitados por las grandes mayorías nacionales.

Referencias bibliográficas

CLEMENTE VIVANCO, José (1902): *Constitución de la República de Cuba comentada por José Clemente Vivanco*, La Habana: San Ignacio Num 58.

HERNÁNDEZ CORUJO, Enrique (1960): *Historia constitucional de Cuba*,

Acosta Aldaya, Ariel D. (2024). “La Constitución de 1901: Inicio de la república neocolonial Historia del Estado y el Derecho”, *Cartapacio de Derecho*, Vol. 46, Facultad de Derecho, Unicen,

Tomo I, La Habana: Compañía Editorial de Libros y Folletos.

INFIESTA, Ramón (1942): *Historia Constitucional de Cuba*, La Habana: Selecta.

TORRES-CUEVAS, Eduardo Y LOYOLA VEGA, Oscar (2001): *Historia de Cuba, 1492-1898. Formación y liberación de la nación*, La Habana: Pueblo y Educación.

TORRES-CUEVAS, Eduardo y SUAREZ SUAREZ, Reinaldo (2018): *El Libro de las Constituciones, Constituciones, Estatutos y Leyes Constitucionales en Cuba entre 1812 y 1936*, Tomo I, La Habana: Imagen Contemporánea.

VEGA VEGA, Juan (1988): *Derecho constitucional revolucionario en Cuba*, La Habana: Ciencias Sociales.